

**Expediente Arbitral N° 01-2022/CAG**

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PICOTA

Vs.

CONSORCIO PICOTA

---

**LAUDO ARBITRAL**

---

Resolución N° 01

**Árbitro Único**

Nils D. Infantes Arbildo

**Secretaria Arbitral**

Angélica Yuliana Sobrino Olea

Perú, 08 de mayo de 2023

<b>TABLA DE ABREVIATURAS .....</b>	<b>3</b>
<b>I. MARCO INTRODUCTORIO .....</b>	<b>4</b>
A. Identificación de las Partes.....	4
B. Convenio Arbitral .....	4
<b>II. ANTECEDENTES DEL LAUDO.....</b>	<b>5</b>
A. Instalación del Tribunal Arbitral Unipersonal.....	5
B. Sobre los gastos arbitrales .....	5
C. Actuaciones procesales y determinación del plazo para laudar .....	6
<b>III. MATERIAS CONTROVERTIDAS Y POSICIONES DE LAS PARTES .....</b>	<b>9</b>
A. Determinación de los Puntos Controvertidos: .....	9
B. Posición de las Partes: .....	11
<b>IV. CUESTIONES PRELIMINARES.....</b>	<b>26</b>
<b>V. ANÁLISIS DEL ÁRBITRO ÚNICO.....</b>	<b>28</b>
A. Sobre el incumplimiento de obligaciones y la prerrogativa de resolver el contrato. ....	28
B. Sobre el efecto y validez de la resolución de Alcaldía N° 481-2022-MPP/A y la resolución de Alcaldía N° 457-2022-MPP/A.....	36
C. Sobre la Adenda N° 03, Segunda Cláusula, al contrato de Consorcio Picota.....	38
D. Sobre la Carta N°085-2022 (5 de agosto) y la Carta N° 90-2022 (12 de agosto). 42	
E. Sobre la responsabilidad patrimonial solidaria, individual o conjunta de los consorciados y la exoneración del consorciado CONASA SRL de responsabilidad, administrativa, tributaria, judicial, penal y/u otro relacionado con la ejecución del objeto contractual. ....	45
F. Respecto a que se establezca la solidaridad en la devolución de la suma de S/13'860,568.22 (Trece Millones Ochocientos Sesenta Mil Quinientos Sesenta Y Ocho Y 22/100 Soles), más intereses. ....	47
G. Sobre la condena de los costos o gastos arbitrales.....	50
<b>VI. LAUDA:.....</b>	<b>52</b>

## **TABLA DE ABREVIATURAS**

<b>Términos empleados en el presente Laudo</b>	
Entidad / Municipalidad / Comuna	Municipalidad Provincial de PICOTA
Contratista / Consortio	Consortio PICOTA
Partes	Municipalidad Provincial de PICOTA y Consortio PICOTA
OSCE	Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
Árbitro Único 7 Tribunal Arbitral	Nils Denis Infantes Arbildo
Contrato	Contrato s/n: "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en Villanueva – Pucacaca – Chicha Alta – Shimbillo - Nuevo Codo – Picota – Santa Rosillo- San Antonio – Nueva Unión – Winge Caspizapa, Pto. Rico, San Hilarión, Provincia de Picota – San Martín".
Centro de Arbitraje / Institución Arbitral	Centro de Arbitraje GALILEA
Ley	Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones con el Estado y su modificatoria, el D. Leg. N° 1341
Reglamento	Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015- EF y modificatoria el D.S. N° 056-2017-EF

## **I. MARCO INTRODUCTORIO**

1. Al 08 de mayo del 2023, se emite el laudo arbitral en el arbitraje seguido entre Consorcio PICOTA y la Municipalidad Provincial de PICOTA, luego de haber realizado las actuaciones arbitrales de conformidad con la ley y normas establecidas, estudiados y analizados los argumentos sometidos a su consideración y deliberando en torno alas pretensiones planteadas por las partes.

### **A. Identificación de las Partes**

Según el contrato administrativo de ejecución de obra se tiene como contratantes a:

2. Por un lado, la Entidad, Municipalidad Provincial de Picota, con RUC N° 20154546953, representado inicialmente por su alcalde Prof. Víctor Ysidro Pérez Saavedra identificado con DNI 10710238 y posteriormente por el actual titular de la Entidad, Sr. Pedro Gracia Ushiñahua.
3. Por otro lado, el Consorcio PICOTA, conformado por la empresa H&M Ingenieros Consultores y Constructores SAC con RUC N° 20493504062, la empresa Becerra Hnos. Contratistas Generales SAC con RUC N° 20528350462, la empresa CONASSA SRL con RUC N° 20408997667 representados por su representante común, el señor, Norbil Iván Becerra Hernández, con domicilio legal en: Urb. Francisco Bolognesi D-8 Iquitos – Maynas – Loreto.

### **B. Convenio Arbitral**

4. El convenio arbitral vinculante para las partes contratantes se encuentra contenido en la Cláusula Vigésima del contrato administrativo de ejecución de obra que establece lo siguiente:

**"CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**

*Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.*

***Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 122, 146, 152, 168, 170, 178, 179 y 180 del***

***Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o en su defecto, en el inciso 45.2 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.***

***El arbitraje será institucional y resuelto por Árbitro Único.***

*Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho de solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 183 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje".*  
(énfasis añadido).

## **II. ANTECEDENTES DEL LAUDO**

### **A. Instalación del Tribunal Arbitral Unipersonal**

5. Mediante Orden Arbitral N° 01 del 02 de noviembre de 2022, el árbitro único, abogado Nils D. Infantes Arbildo, declara instalado el tribunal arbitral e iniciadas las actuaciones arbitrales. Asimismo, la abogada Angélica Yuliana Sobrino Olea, fue designada por la institución arbitral, para desempeñar las labores como secretaria arbitral.
6. La designación e instalación del tribunal arbitral, se ajusta con lo establecido en el convenio arbitral y las exigencias de la normativa vigente en cuanto al contrato administrativo de ejecución de obra.

### **B. Sobre los gastos arbitrales**

7. A partir de la liquidación realizada por la institución arbitral y según lo establecido por el Art. 72° - anticipo de honorarios – del D.L. N° 1071, Decreto Legislativo que Norma El Arbitraje, en la Orden Arbitral N° 01, se recoge como anticipo de honorarios profesionales del tribunal arbitral unipersonal y los gastos administrativos del Centro, los siguientes:

<b>Concepto</b>	<b>Monto (Entidad)</b>	<b>Monto (Contratista)</b>
Honorarios del Árbitro		

único	S/ 75,505.50	S/ 75,505.50
Gastos Administrativos del Centro	S/ 55,385.02	S/ 55,385.02

8. Mediante Orden Arbitral N° 04 del 07 de diciembre del 2022, a partir de la liquidación de anticipos de honorarios realizada por la institución arbitral, en cuanto a la tercera pretensión principal (indeterminada) y de la cuarta pretensión principal (determinada) se recogen como un segundo anticipo de honorarios profesionales del árbitro único y los gastos administrativos del centro de arbitraje, los siguientes:

Concepto	Monto (Entidad)	Monto (Contratista)
Honorarios del Árbitro único	S/.40,025.50	S/.40,025.50
Gastos Administrativos del Centro	S/.22,113.70	S/.22,113.70

9. Mediante Orden Arbitral N° 07 del 05 de enero del 2023, en atención a la quinta pretensión principal de la demanda, según lo establecido por la institución arbitral, se recogen como un tercer anticipo de honorarios profesionales del árbitro único y los gastos administrativos del centro de arbitraje, los siguientes montos:

Concepto	Monto (Entidad)	Monto (Contratista)
Honorarios del Árbitro Único	S/.4,737.72	S/.4,737.72
Gastos Administrativos del Centro	S/.3,086.74	S/.3,086.74

10. Los montos anteriormente indicados fueron cancelados en su totalidad por la Municipalidad Provincial de Picota ante la renuencia de la contraparte, Consorcio Picota, en asumir sus obligaciones.

### **C. Actuaciones procesales y determinación del plazo para laudar**

11. Mediante Orden Arbitral N° 01 del 02 de noviembre de 2022, el Árbitro Único establece por abierto o iniciado el plazo de diez (10) días hábiles para la presentación de la demanda arbitral.
12. La Municipalidad Provincial de Picota el 07 de noviembre de 2022,

cumplió con presentar su escrito de demanda dentro del plazo otorgado, junto con todos los medios probatorios ofrecidos (documentales).

13. A partir de la regla N° 45<sup>1</sup> del Acta de Instalación se procede a notificar con la demanda a la parte demandada, Consorcio Picota, el 08 de noviembre del 2022, según se aprecia en el siguiente gráfico:



14. El 17 de noviembre del 2022 se emite la Orden Arbitral N° 02 con la que se determina correr traslado de la nulidad presentada por Consorcio Picota a la Municipalidad Provincial de Picota por el Plazo de 3 días hábiles.
15. Mediante Orden Arbitral N° 03 del 25 de noviembre del 2022 se establece, entre otros, que, Consorcio Picota no ha presentado la "contestación a la demanda arbitral", así tampoco, excepciones u objeciones o cuestiones probatorias dentro de los plazos establecidos. Asimismo, se requiere a la Entidad y contratista informen sobre la predisposición y documentación necesaria a efectos de arribar a una conciliación, finalmente el que propongan los puntos controvertidos.
16. A través de la Orden Arbitral N° 04 del 07 de diciembre del 2022, se resuelve, entre otros, desestimar el pedido de nulidad realizado por Consorcio Picota, prescindir de las audiencias de conciliación y de

<sup>1</sup> Regla N° 45 del Acta de Instalación

45. El tribunal arbitral procederá a notificar al consorcio vía correo electrónico y a partir del día siguiente de la remisión de dicho correo, se inicia el plazo de diez (10) días hábiles para hacer uso de su derecho a contestar la demanda y, de considerarlo conveniente, formular reconvencción u otros<sup>4</sup>. Tanto en la contestación de la demanda, en la reconvencción u otros deberán de ofrecerse los medios probatorios que respalden o sirvan de sustento a las pretensiones planteadas, debiendo presentar su contestación, reconvencción u otros vía correo electrónico, adjuntando como anexo una versión en formato Word.

pruebas, se establece puntos controvertidos, se admiten los medios probatorios de la demanda, se incorporan medios probatorios de oficio y se cierra la etapa probatoria.

17. Consorcio Picota el 15 de diciembre del 2022 presenta recurso de reconsideración contra la Orden Arbitral N° 04, recurso que fuera presentado dentro del plazo establecido en las reglas del arbitraje (Regla N° 76° del acta de instalación).
18. El 22 de diciembre del 2022 se emite la Orden Arbitral 05, con la que, entre otros, se corre traslado a la Entidad del recurso de reconsideración contra la Orden Arbitral N° 04 (presentado por Consorcio Picota).
19. A través de la Orden Arbitral N° 06 del 23 de diciembre del 2022, se resuelve, entre otros, rechazar el recurso de reconsideración planteado por el Consorcio Picota, se incorporan al bagaje documentario los informes N° 138-2022-SGOL-GIP/MPP y el N° 197-2022/JHFS-AT-SGOL/MPP, corriéndose traslado de estos a Consorcio Picota, se prescinde de la audiencia de informes orales y se declara cerrada la instrucción y el inicio del plazo para laudar.
20. Mediante Orden Arbitral N° 09 del 03 de febrero del 2023 se tiene por apersonado al actual titular de la Entidad, Sr. Pedro Gracia Ushiñahua y como actual defensa técnica al abogado Erik D. Cabrejos Torres, quienes señalan domicilio procesal y solicitan ampliación de plazo para pago, por lo que se les informa que ello deberá de ser solicitado y tramitado ante la institución arbitral.
21. Mediante Orden Arbitral N° 10 del 08 de febrero del 20223, se determina ampliar el plazo para laudar en 30 días adicionales a los establecido inicialmente.
22. En fecha 29 de marzo se emite la Orden Arbitral N° 11 a la cual inicialmente y por error se le asignó una numeración incorrecta (09); la misma que fue corregida mediante la Orden Arbitral N° 12 del 10 de abril del 2023, asimismo, se establece como fecha de vencimiento del plazo para laudar el 09 de mayo del 2023.



### **III. MATERIAS CONTROVERTIDAS Y POSICIONES DE LAS PARTES**

#### **A. Determinación de los Puntos Controvertidos:**

23. A través de la Orden Arbitral N° 04 del 07 de diciembre de 2022 se fijaron los puntos controvertidos, los cuales pasamos a detallar:

- **Primer Punto Controvertido:** Si corresponde determinar el efecto y validez de la declaración de resolución del contrato de la obra "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en Villanueva - Pucacaca - Chinchá Alta - Shimbillo - Nuevo Codo - Picota - Santa Rosillo - San Antonio - Nueva Unión - Winge Caspizapa, Pto. Rico, San Hilarión, Provincia De Picota - San Martín" realizada por la Entidad mediante Resolución de Alcaldía N° 457-2022-MPP/A, comunicada por conducto notarial al Consorcio Picota mediante carta N° 507-2022-MPP/A; según lo establecido por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
- **Segundo Punto Controvertido:** Si corresponde determinar el efecto y validez de la Resolución de Alcaldía N° 481-2022-MPP/A en cuanto a no enervar o alterar el contenido de la Resolución de Alcaldía N° 457-2022-MPP/A comunicada por conducto notarial al Consorcio Picota mediante carta N° 507-2022- MPP/A al tratarse de una rectificación de oficio, de conformidad con el Art. 212° del T.U.O. de la Ley 27444 - rectificación de errores de los actos administrativos.
- **Tercer Punto Controvertido:** Determinar si corresponde declarar como no vinculante e ineficaz para la Municipalidad Provincial de Picota la "segunda cláusula: OBJETO DE LA ADENDA" de la "adenda N° 3" del Contrato de Consorcio Picota, en cuanto declara la nulidad y sin efecto jurídico, por parte de los consorciados, de las actividades realizadas por el Sr. JORGE LUIS CUBAS SANCHO, al exceder las facultades previstas en el contrato de Consorcio, específicamente las realizadas mediante cartas N° 085-2022 y la N° 90-2022.
- **Cuarto Punto Controvertido:** Si corresponde determinar los efectos legales y validez de las cartas N° 085- 2022 y la N° 90-

2022 emitidas por el Consorcio Picota a la Municipalidad Provincial de Picota.

- **Quinto Punto Controvertido:** Si corresponde declarar la existencia de responsabilidad patrimonial solidaria, individual o conjunta de las empresas CONASSA S.R.LTDA., Becerra Hnos. Contratistas Generales S.A.C. y H&M Ingenieros Consultores y Constructores S.A.C., que conforman el Consorcio Picota respecto a la ejecución contractual del contrato de obra "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en Villanueva - Pucacaca - Chinchá Alta - Shimbillo - Nuevo Codo - Picota - Santa Rosillo - San Antonio - Nueva Unión - Winge Caspizapa, Pto. Rico, San Hilarión, Provincia De Picota -San Martín".
- **Sexto Punto Controvertido:** Si corresponde determinar sin efecto legal para la Entidad el párrafo final de la "cláusula séptima" que establece que: LOS CONSORCIADOS convienen exonerar al consorciado CONASSA SRL de toda responsabilidad administrativa, tributaria, judicial, penal, civil y/u otro relacionado con la ejecución del objeto contractual por parte del consorcio.
- **Séptimo Punto Controvertido:** Si corresponde ordenar a las empresas CONASSA S.R.LTDA., Becerra Hnos. Contratistas Generales S.A.C. y H&M Ingenieros Consultores y Constructores S.A.C. (que conforman el Consorcio Picota) devuelvan SOLIDARIAMENTE, a la Municipalidad Provincial de Picota la suma de S/13'860,568.22 (Trece Millones Ochocientos Sesenta Mil Quinientos Sesenta y Ocho con 22/100 SOLES), más los intereses generados al momento de la emisión del laudo, y por generarse al momento de la ejecución del laudo, por concepto de los montos no amortizados de los adelantos directos y de materiales que a pesar de haberse resuelto el contrato y haber sido requeridos notarialmente, hasta el momento mantienen en su propiedad ilegalmente.

- **Octavo Punto Controvertido:** Si corresponde declarar que el Consorcio Picota asuma en su totalidad los costos del arbitraje.
- 24. El Árbitro Único deja establecido que se reserva el derecho de analizar, y en su caso, resolver los puntos controvertidos, no necesariamente en el orden previsto anteriormente.
- 25. Asimismo, el Árbitro Único establece que podría omitir, con expresión de razones, el pronunciamiento sobre algún punto controvertido, si ello careciera de objeto debido al pronunciamiento sobre otro u otros puntos controvertidos con los que el omitido guarde vinculación.

## **B. Posición de las Partes:**

### **B.1. Respecto del primer punto controvertido**

**Primer Punto Controvertido:** Si corresponde determinar el efecto y validez de la declaración de resolución del contrato de obra "Ampliación Y Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado En Villanueva - Pucacaca - Chinchá Alta - Shimbillo – Nuevo Codo – Picota - Santa Rosillo - San Antonio - Nueva Unión – Winge Caspizapa, Pto. Rico, San Hilarión, Provincia De Picota - San Martín" realizada por la Entidad mediante Resolución de Alcaldía N° 457-2022-MPP/A, comunicada por conducto notarial al Consorcio Picota mediante carta N° 507-2022-MPP/A; según lo establecido por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

## **Posición de la Entidad**

- 26. La Entidad indica en su escrito de demanda que, a partir del consentimiento de la buena pro (13 de abril del 2018) al Consorcio Picota (conformado por CONASSA SRL, Becerra Hnos. Contratistas Generales SAC y H & M Ingenieros Consultores y Constructores SAC), es que se perfecciona o suscribe, el 17 de abril del 2018, el contrato de ejecución de la obra: "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en Villanueva – Pucacaca – Chinchá Alta – Shimbillo – Nuevo Codo – Picota – Santa Rosillo- San Antonio – Nueva Unión – Winge Caspizapa, Pto. Rico, San Hilarión, Provincia de Picota – San

Martín”, por el monto contractual de S/ 48,880,000.00 (Cuarenta y Ocho Millones Ochocientos Ochenta Mil con 00/100 soles).

27. Menciona la Entidad que, el referido contrato de obra en cuanto al plazo de ejecución (540 días calendarios según cláusula quinta del contrato de obra) se inicia el “23.10.201” y la fecha de término del plazo contractual lo fue inicialmente el “14.04.2020”, pero con las ampliaciones de plazo N° 03 (por 95 días calendario) y la N° 05 (por 50 días calendario) se fijó como nueva fecha de término de obra el “06 de setiembre del 2020”. Asimismo, menciona la demandante que, en mérito a la ampliación de plazo excepcional por 136 días, debido a la emergencia sanitaria y la ampliación de plazo excepcional de 60 días, la nueva fecha de término de obra se fijó para el 21 de marzo del 2021, y por la suspensión de plazo N° 01 por 32 días y la suspensión de plazo N° 02 por 381 días la nueva fecha de término contractual se establece para el 09 de mayo del 2022. Adiciona la Entidad que, con la suspensión de plazo N° 03, la nueva fecha de término contractual fue el “19.07.2022”; y finalmente, expone la municipalidad que, en merito a la ampliación de plazo N° 11 (51 días) aprobada por R.A. N° 362-2022-MPP-A (26 de julio del 2022), la nueva fecha de culminación de la obra lo fue el 08 de setiembre del 2022.
28. Es así, que dentro de la ejecución contractual el Supervisor, el 05 de julio del 2022, realiza el asiento N° 999, en el que indicaría, entre otros, lo siguiente:
- ✓ “según valorización del mes de junio, presentada por el contratista se tiene que un avance acumulado ejecutado de 47.45%, siendo esto menor al 80% del avance acumulado programado de 91.62%”.
  - ✓ Dicho supervisor, “solicita al contratista presentar el calendario acelerado de ejecución de obra, según el art. 173º del R.L.C.E”.
29. Expone la Entidad que, posteriormente, el 25 de julio del 2022, la supervisión (jefe de supervisión), mediante carta N° 052-2022-CONST.SV EIRL/TG emite el informe técnico N° 022-2022-CONST.S&V EIRL/ING BLC-SO en el que, entre otros, informa y recomienda, lo

siguiente:

- ✓ *"el Contratista no ha presentado el calendario acelerado de ejecución de obra, incumpliendo lo prescrito en el artículo N° 173° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado".*
- ✓ *Recomienda a la Entidad "proceder con la intervención económica o resolución de contrato, de acuerdo a lo que establece el art. 173 del Reglamento, D.S. 350-2015-EF y su modificatoria D.S. N° 056-2017-EF".*

30. Es así que el Administrador de obra, Ing. Jimmy H. Fasanando Sinti, emite el informe N° 142-2022/JHFS-AC-SGOL/MPP con el que:

- ✓ *"recomienda se emita acto resolutivo y se resuelva el contrato de obra de ejecución celebrado entre la Municipalidad Provincial de Picota y el Consorcio Picota", por la causal contenida en el segundo párrafo del art. 173° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el D.S. 350-2015-EF y modificado por el D.S. 056-2017-EF,*
- ✓ *Recomendación que tiene como antecedente el "al haber incumplido el Consorcio Picota con la obligación legal de presentar un nuevo calendario que contemple la aceleración de los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto".*

31. Argumenta la Entidad que, de acuerdo a lo informado por el Supervisor de la obra, en el presente caso se ha dado la situación prevista en el segundo párrafo del artículo 173° del Reglamento, toda vez que en el asiento 999, la supervisión ha dejado sentado que de un avance programado de 91,62% solo se tiene un avance del 47.45%, por lo que ha solicitado al contratista presentar el calendario acelerado de ejecución de obra, según el artículo 173° del RLCE, obligación legal que no ha sido cumplida por el Consorcio Picota, ejecutor de la obra, de esta manera se cumpliría el supuesto contemplado en el segundo párrafo del art. 173°

del Reglamento de la Ley de contrataciones con el Estado.

32. Sustenta su postura la Entidad en el contenido final del cuarto párrafo del Art. 136° del reglamento de la ley de contrataciones con el Estado (en adelante RLCD), el cual establecía que, *“la Entidad puede resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al contratista, cuando se deba a la acumulación del monto máximo de penalidad por mora u otras penalidades o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida. En estos casos, basta comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato.”*
33. *Menciona la Entidad, el contenido del art. 173 del RLCE, en cuanto señala que, “Durante la ejecución de la obra, el contratista está obligado a cumplir los avances parciales establecidos en el calendario de avance de obra vigente. En caso de retraso injustificado, cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada a una fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorización acumulada programada a dicha fecha, el inspector o supervisor ordena al contratista que presente, dentro de los siete (7) días siguientes, un nuevo calendario que contemple la aceleración de los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto, anotando tal hecho en el cuaderno de obra, y que, “La falta de presentación de este calendario dentro del plazo señalado en el párrafo precedente puede ser causal para que opere la intervención económica de la obra o la resolución del contrato...”*
34. Cierra dicho extremo, la Entidad al mencionar que, *“es imposible realizar el requerimiento previo al contratista previsto en el art. 136 del RLCE, toda vez que el art. 173° establece un requerimiento previo con un plazo máximo de 07 días y es ante este incumplimiento que la entidad puede intervenir económicamente la obra o RESOLVER EL CONTRATO, que es la alternativa que ha tomado la Entidad, por lo que el Contrato se encuentra bien resuelto”*.
35. De igual modo indica la Entidad que, *“anteriormente a la decisión adoptada con la emisión de la Resolución de Alcaldía N° 457-2022-MPP/A, con la Carta N° 483-2022-MPP/A de fecha 26 de agosto del 2022 y*

notificada en el domicilio del Consorcio Picota el día 13 de setiembre del año 2022 ya había iniciado el procedimiento de resolución de contrato de acuerdo a lo establecido en el art. 136 del RLCE, solicitando al Consorcio Picota el cumplimiento de obligaciones contractuales, contenidas en el informe N° 126-2022/JHFS-AC-SGOL/MPP...". Siendo que, *"este procedimiento no llegó a su término, toda vez que la Entidad decidió resolver el contrato por la causal prevista en el art. 173 del RLCE, por lo que el Consorcio Picota no puede oponer como razón de invalidez, nulidad o ineficacia de la resolución contractual determinada por la R.A. 457-2022-MPP/A que no se haya cumplido el procedimiento establecido en el art. 136 del Reglamento, en cuanto al requerimiento previo, con el apercibimiento de 15 días para resarcir el incumplimiento."*

36. Finalmente concluye, la Entidad, el haber *"cumplido con el procedimiento establecido en el RLCE para adoptar la decisión de resolver el contrato con el Consorcio Picota..."* *"puesto que en el presente caso se han dado los presupuestos legales establecidos en el RLCE"*, lo cuales a entender de la Entidad serían: "a) **Existe La Causal De Resolución:** prevista en el literal 1) del art. 135 del RLCE, toda vez que el Consorcio Picota ha incumplido injustificadamente sus obligaciones contractuales legales o reglamentaria a su cargo, pese a haber sido requerido para ello"; "b) **Ha Existido Requerimiento Previo:** Mediante el asiento de cuaderno de obra 999, el Supervisor de la obra efectuó el requerimiento de entrega del calendario de obra acelerado en el plazo máximo de 7 días al Consorcio Picota, de conformidad con lo establecido en el art. 173 del RLCE"; "c) **El Incumplimiento Del Consorcio:** El Consorcio no cumplió con su obligación contractual de entregar el calendario de aceleración de los trabajos, previsto en el art. 173° del RLCE, tal como lo ha informado el representante legal de la empresa supervisora de la obra el 25 de julio del 2022, mediante carta N° 052-2022-CONST.SV EIRL/TG, con la cual hace llegar a la Entidad el informe técnico N° 022-2022-CONST. S&V EIRL/ING BLC-SO del Jefe de Supervisión de la ejecución de la obra, por lo que la consecuencia lógica siguiente es la **RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA**, tal como se ha decidido en la Resolución de Alcaldía



*Nº 457-2022-MPP/A."*

37. En virtud de lo anterior, la Entidad solicita al árbitro único que, declare fundada la primera pretensión de su demanda.

#### **Posición de la Contratista**

38. Respecto de la primera pretensión de la demanda de la Entidad, el Contratista no se ha pronunciado, puesto que no ha realizado o presentado contestación de la demanda, propuesto cuestiones probatorias, excepciones, objeciones u otros, menos así ha ofrecido medios probatorios, que ataquen o cuestionen esta pretensión.

#### **B.2. Respecto del segundo punto controvertido**

**Segundo Punto Controvertido:** Si corresponde determinar el efecto y validez de la Resolución de Alcaldía Nº 481-2022-MPP/A en cuanto a no enervar o alterar el contenido de la Resolución de Alcaldía Nº 457-2022-MPP/A comunicada por conducto notarial al Consorcio Picota mediante carta Nº 507-2022- MPP/A al tratarse de una rectificación de oficio, de conformidad con el Art. 212º del T.U.O. de la Ley 27444 - rectificación de errores de los actos administrativos.

#### **Posición de la Entidad**

39. La Entidad indica respecto a la Resolución de Alcaldía Nº 457-2022- MPP/A que, esta recoge dentro de la parte expositiva la referencia al "asiento *1001 del Supervisor*" del *"06 de julio del 2022"*, empero ello sería un *"error numérico"*, tanto en cuanto al número de asiento como en lo referente a la fecha, por lo que argumenta que, según el contenido del Art. 212º, Título III revisión de los actos en vía administrativa y el Capítulo I revisión de oficio del TUO de la Ley Nº 27444 se ha procedió a rectificar de oficio dichos errores, vía la resolución de rectificación Nº 481-2022-MPP/A de fecha 03 de octubre del 2022 en la que se expresa dicho error y se corrige al mencionar como asiento de obra correcto el Nº 999 del 05 de julio del 2022.



40. Expresa la demandante que, la referida rectificación de oficio del error material numérico en nada enerva o invalida la decisión de resolver el contrato contenida en la Resolución de Alcaldía N° 457-2022-MPP/A, por lo que solicita al árbitro único se sirva declarar que la resolución de rectificación N° 481-2022-MPP/A de fecha 03 de octubre del 2022 en nada enerva o altera el contenido de la Resolución de Alcaldía N° 457-2022-MPP/A (14 de setiembre del 2022), la que fuera comunicada al Consorcio Picota mediante carta N° 507-2022-MPP/A el 15 de setiembre del 2022 (conducto notarial), pues, señala la Entidad, se trataría de una mera rectificación de oficio de conformidad con lo establecido en el art. 212° del TUO de la Ley N° 27444, que regula el trámite de rectificación de errores de los actos administrativos.

#### **Posición del Contratista**

41. Respecto a la pretensión subordinada de la primera pretensión principal de la Entidad, la Contratista no se ha pronunciado, puesto que no ha realizado o presentado contestación a la demanda, propuesto cuestiones probatorias, excepciones, objeciones u otros, menos así ha ofrecido medios probatorios que cuestionen o ataquen dicha pretensión.

#### **B.3. Respecto del tercer punto controvertido**

**Tercer Punto Controvertido:** Determinar si corresponde declarar como no vinculante e ineficaz para la Municipalidad Provincial de Picota la "segunda cláusula: OBJETO DE LA ADENDA" de la "adenda N° 3" del Contrato de Consorcio Picota, en cuanto declara la nulidad y sin efecto jurídico, por parte de los consorciados, de las actividades realizadas por el Sr. Jorge Luis Cubas Sancho, al exceder las facultades previstas en el contrato de Consorcio, específicamente las realizadas mediante cartas N° 085-2022 y la N° 90-2022.

#### **Posición de la Entidad**

42. La Entidad menciona que, el 27 de julio del 2022, el representante común del Consorcio Picota, Sr. Jorge Luis Cubas Sancho, mediante carta notarial N° CP.098-2022 comunica a la Entidad la decisión de

resolver el contrato en forma total, programando la constatación física e inventario previsto en el art. 177° del RLCE para el día 4 y 5 de agosto a las 10:00 a.m. para posteriormente, el 04 de agosto del 2022, mediante carta simple el mismo representante común difiere la constatación física e inventario para el día 5 y 6 de setiembre del 2022.

43. Esboza la Entidad el que, posteriormente, el 12 de agosto del 2022, dicho representante común del Consorcio Picota, previa legalización de su firma por notario público, mediante carta N° CP 090-2022 deja sin efecto la carta notarial que resuelve el contrato basado, teniendo como argumentos principales el *"no habiendo perfeccionado la resolución" y en razón de que dicho consorcio o "su representada hasta la fecha continúa ejecutando trabajos propios de la obra, contando con el personal respectivo y supervisor de la obra"*.
44. Advierte la Entidad entender como necesario analizar que *"Consorcio Picota tal como lo afirma el representante común jamás dejó de trabajar en la obra"* hechos que quedarían demostrados *"con las anotaciones del residente de obra hasta el día 07 de setiembre, quien recién el día 09 de setiembre del 2022 ha presentado una carta ante la Municipalidad Provincial de Picota comunicando su renuncia al cargo de residente."*
45. Relata la Entidad respecto al sustento de su pretensión que, "los integrantes del Consorcio Picota han suscrito la adenda N° 03 en la que en el apartado SEGUNDO: OBJETO DE LA ADENDA, acuerdan dejar sin efecto la designación del representante legal Sr. Jorge Luis Cubas Sancho, identificado con D.N.I. N° 47378371, la que surte todos sus efectos legales a partir de la fecha; dejando constancia que todas las actividades que se encuentran dentro de sus facultades y hasta el 27 de julio del 2022, tienen plena vigencia, **declarando Nulo y sin efecto jurídico las actividades realizadas excediéndose en sus facultades previstas en el contrato de Consorcio específicamente las cartas N° 085-2022 de 5 de agosto y la N° 090-2022 de fecha 12 de agosto del 2022;** en consecuencia acuerdan designar un nuevo representante legal. Y se acuerda modificar la Cláusula Quinta del

Contrato original del CONSORCIO PICOTA...”

46. Sobre el particular, la Entidad entiende que, los integrantes del Consorcio Picota quienes han elaborado y suscrito la adenda 3 del Consorcio Picota *“están asumiendo que poseen prerrogativas exorbitantes propias de la Administración Pública, al declarar unilateralmente en un contrato de consorcio la nulidad de las actuaciones realizadas por su propio representante común, cuando es evidente que no poseen dichas facultades o prerrogativas, por tratarse de un extraneus a la administración pública, meros contratistas que deben acudir, de conformidad con lo establecido en la cláusula décima cuarta del contrato de consorcio Picota, al fuero arbitral, como así se ha previsto en dicho contrato...”*.
47. Finalmente, respecto a este punto controvertido la Entidad solicita que se declare que no le resulta vinculante e ineficaz la segunda cláusula: *“OBJETO DE LA ADENDA, de la adenda N° 3 del contrato de consorcio Picota, del 18 de agosto del 2022, respecto a la declaración de nulidad y sin efecto jurídico, de parte de los consorciados, de las actividades realizadas por el Sr. Jorge Luis Cubas Sancho”*. De manera específica *“en cuanto mencionan el excederse de sus facultades al emitir las cartas N° 085-2022 (5 de agosto) y la carta N° 90-2022 (12 de agosto del 2022), y en consecuencia, se declare fundada la pretensión subordinada a la segunda pretensión principal”*.

#### **Posición de la Contratista**

48. Respecto a la segunda pretensión principal contenida en la demanda de la Entidad, la Contratista no se ha pronunciado, puesto que no ha realizado o presentado contestación de la demanda, propuesto cuestiones probatorias, excepciones, objeciones u otros, menos así ha ofrecido medios probatorios que desvirtúen los argumentos o pretensión de la Entidad.

#### **B.4. Respecto del cuarto punto controvertido**

**Cuarto Punto Controvertido:** Si corresponde determinar

los efectos legales y validez de las cartas N° 085-2022 y la N° 90-2022 remitidas por el Consorcio Picota a la Municipalidad Provincial de Picota.

#### **Posición de la Entidad**

49. La Entidad bajo los mismos argumentos desarrollados precedentemente y que corresponden al tercer punto controvertido solicita el que se determinen que las cartas N° 085-2022 y 90-2022 emitidas por el Consorcio Picota no tienen validez o efectos legales respecto a la Entidad.

#### **Posición del Contratista**

50. Respecto la pretensión subordinada a la segunda pretensión principal contenida en la demanda de la Entidad, la Contratista no se ha pronunciado, puesto que no ha realizado o presentado contestación de la demanda, propuesto cuestiones probatorias, excepciones, objeciones u otros, menos así ha ofrecido medios probatorios que ataquen, cuestionen o rebatan la postura de la Entidad.

#### **B.5. Respecto del quinto punto controvertido**

**Quinto Punto Controvertido:** Si corresponde declarar la existencia de responsabilidad patrimonial solidaria, individual o conjunta de las empresas CONASSA S.R.LTDA., Becerra Hnos. Contratistas Generales S.A.C. y H & M Ingenieros Consultores Y Constructores S.A.C., que conforman el "Consorcio Picota" respecto a la ejecución contractual del contrato de obra "Ampliación Y Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado En Villanueva - Pucacaca - Chinchá Alta - Shimbillo – Nuevo Codo – Picota - Santa Rosillo - San Antonio - Nueva Unión – Winge Caspizapa, Pto. Rico, San Hilarión, Provincia De Picota -San Martín".

#### **Posición de la Entidad**

51. Al respecto la Entidad describe el que, habiendo obtenido la buena pro las empresas consorciadas (CONASSA SRL, Becerra Hnos. Contratistas

Generales SAC y H&M Ingenieros Consultores Y Constructores SAC) decidieron celebrar el Contrato de Consorcio PICOTA referido al acuerdo (cláusula primera) de *participar en consorcio con* la finalidad única y exclusiva de desarrollar el contrato correspondiente al proceso de la Licitación Pública N° 01-2018-MPP/CS, convocada para la ejecución de la obra "Ampliación Y Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado En Villanueva - Pucacaca - Chinchá Alta - Shimbillo - Nuevo Codo - Picota - Santa Rosillo - San Antonio - Nueva Unión - Winge Caspizapa, Pto Rico, San Hilarión, Provincia De Picota -San Martín".

52. Es así, expresa la Entidad, que, en el "último párrafo de la cláusula séptima del contrato de consorcio", los consorciados establecen "exonerar al consorciado CONASSA SRL de toda responsabilidad administrativa, tributaria, judicial, penal, civil y/u otro relacionado con la ejecución del objeto contractual por parte del consorcio."
53. Entiende la Entidad que, dicho acuerdo relatado en líneas anteriores es nulo de pleno derecho, pues el art. 13° numeral 13.2. de la Ley de Contrataciones del Estado Ley N° 30225 establece que "**Los integrantes del consorcio son responsables solidariamente ante la Entidad por las consecuencias derivadas de su participación durante la ejecución del contrato**" y que, "claramente aparece que las tres empresas consorciadas son responsables de la EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LA OBRA, en la misma cláusula séptima".
54. Es por ello que la Entidad, concluye en este extremo, solicitando al tribunal arbitral el que determine la existencia de responsabilidad patrimonial solidaria, individual o conjunta de las empresas consorciadas (CONASSA SRL, Becerra Hnos. Contratistas Generales SAC y H&M Ingenieros Consultores Y Constructores SAC) conformantes del CONSORCIO PICOTA y, declarar que no tiene efecto legal alguno para la Entidad el párrafo final de la cláusula séptima que establece que "LOS CONSORCIADOS convienen exonerar al consorciado CONASSA SRL de toda responsabilidad administrativa, tributaria, judicial, penal, civil y/u otro relacionado con la ejecución del objeto contractual por parte del consorcio".

### **Posición del Contratista**

55. La Respecto tercera pretensión principal contenida en la demanda de la Entidad, la Contratista no se ha pronunciado, puesto que no ha realizado o presentado contestación de la demanda, propuesto cuestiones probatorias, excepciones, objeciones u otros, menos así ha ofrecido medios probatorios que cuestionen la postura de la Entidad.

### **B.6. Respecto del sexto punto controvertido**

**Sexto Punto Controvertido:** Si corresponde determinar sin efecto legal para la Entidad el párrafo final de la "cláusula séptima" que establece que: LOS CONSORCIADOS convienen exonerar al consorciado CONASSA SRL de toda responsabilidad administrativa, tributaria, judicial, penal, civil y/u otro relacionado con la ejecución del objeto contractual por parte del consorcio.

### **Posición de la Entidad**

56. A partir de los argumentos referidos al punto controvertido anterior (quinto) la Entidad solicita que el tribunal arbitral declare sin efecto legal para ella el párrafo final de la cláusula séptima del contrato de Consorcio Picota.

### **Posición del Contratista**

57. Respecto a la tercera pretensión principal contenida en la demanda de la Entidad, la Contratista no se ha pronunciado, puesto que no ha realizado o presentado contestación de la demanda, propuesto cuestiones probatorias, excepciones, objeciones u otros, menos así ha ofrecido medios probatorios que rebatan los argumentos o posturas de la Entidad.

### **B.7. Respecto del séptimo punto controvertido**

**Séptimo Punto Controvertido:** Si corresponde ordenar a las empresas CONASSA S.R.LTDA., Becerra Hnos. Contratistas Generales S.A.C. y H & M Ingenieros Consultores Y Constructores S.A.C. que conforman el Consorcio Picota devuelvan

SOLIDARIAMENTE, a la Municipalidad Provincial de Picota la suma de S/ 13'860,568.22 (Trece Millones Ochocientos Sesenta Mil Quinientos Sesenta Y Ocho Y 22/100 Soles), más los intereses generados al momento de la emisión del laudo, y por generarse al momento de la ejecución del laudo, por concepto de los montos no amortizados de los adelantos directos y de materiales que a pesar de haberse resuelto el contrato y haber sido requeridos notarialmente, hasta el momento mantienen en su propiedad ilegalmente.

### **Posición de la Entidad**

58. La Entidad sostiene que, tratándose de una obra pública la LCE y su reglamento prevé la entrega de adelantos directo y de materiales, previa entrega (del contratista) de carta(s) fianza(s) por el mismo monto adelantado.
59. La Entidad advierte que, en el presente caso, se han otorgado adelantos.
60. Así describe la entrega de un primer adelanto directo, por el monto de S/4,888,000.00 (Cuatro Millones Ochocientos Ochenta Y Ocho Mil Y 00/100 Soles), garantizados con Carta Fianza N° E0661-00-2018 y con sus sucesivas renovaciones hasta la C.F. N° E0661-16-2018 con vencimiento el 11 de junio del 2022, la cual "no fue renovada, por lo que no es posible recuperar el dinero dado en adelanto, **que descontado la suma amortizada en las diferentes valorizaciones aún queda en poder el Consorcio la suma de S/2'630.134.12 (DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL CIENTO TREINTA CUATRO Y 12/100 SOLES).**"
61. Menciona un segundo adelanto directo, por el monto de S/2,444,000.00 (Dos Millones Cuatrocientos Cuarenta Y Cuatro Mil Y 00/100 Soles), garantizados con Carta Fianza N° E0828-00-2020 con sus sucesivas renovaciones hasta la C.F. N° E0828-06-2020 con vencimiento el 28 de marzo del 2022, "la cual no fue renovada, por lo que no es posible recuperar el dinero dado en adelanto, **que descontado la suma amortizada en las diferentes valorizaciones aún queda en poder**



**el Consorcio la suma de S/2'271,093.10 (Dos Millones Doscientos Setenta Y Un Mil Noventa Y Tres Y 10/100 Soles)."**

62. Incluye la Entidad la existencia de un adelanto de materiales, por el monto de S/2,444,000.00 (Dos Millones Cuatrocientos Cuarenta Y Cuatro Mil Y 00/100 Soles), garantizados con Carta Fianza N° E0846-00-2020 con sus sucesivas renovaciones hasta la C.F. N° E0846-06-2020 con vencimiento el 01 de abril del 2022, "la cual no fue renovada, por lo que no es posible recuperar el dinero dado en adelanto, **que asciende a la misma suma afianzada de S/2,444,000.00 (Dos Millones Cuatrocientos Cuarenta Y Cuatro Mil Y 00/100 Soles), al no haberse amortizado esta cantidad en las valorizaciones presentadas por el Consorcio.**"
63. Igualmente menciona, la Entidad, un segundo adelanto de materiales, por el monto de S/ 9,776,000.00 (Nueve Millones Setecientos Setenta Y Seis Y 00/100 Soles), garantizados con Carta Fianza N° E2151-00-2018 con sus sucesivas renovaciones hasta la C.F. N° E2151-14-2018 con vencimiento el 18 de junio del 2022, "la cual no fue renovada, por lo que no es posible recuperar el dinero dado en adelanto, **descontado la suma amortizada en las diferentes valorizaciones aún queda en poder del Consorcio la suma de S/6'515,341.10 (Seis Millones Quinientos Quince Mil Trescientos Cuarenta y Uno Y 10/100 Soles).**"
64. Sobre el particular la Entidad señala que, "estos adelantos han sido otorgados al Consorcio Picota de acuerdo a Ley, y si bien es cierto fueron debidamente garantizados al otorgarse dichos adelantos, posteriormente no fueron renovadas".
65. Adiciona la Entidad que, las sumas pendientes de amortización no han podido ser recuperadas mediante la ejecución de las cartas fianzas, al estar estas vencidas, lo cual ya ha sido puesto de conocimiento ante la Fiscalía.
66. En cuanto al deber de devolución la Entidad relata que, el monto a devolver se cuantifica en S/ 13'860,568.22 (Trece Millones Ochocientos Sesenta Mil Quinientos Sesenta Y Ocho Y 22/100 Soles), los cuales se encontrarían retenidos ilegalmente.



67. Es así que la Entidad refiere el haber cursado la carta N° 508-2022-MPP/A del 14 de setiembre de 2022, por conducto notarial, al Consorcio Picota para que realice la devolución del monto resultante de los adelantos no amortizados, pero hasta el momento el Consorcio no ha cumplido con devolver estas cantidades.
68. En virtud de lo anterior, la Entidad, solicita que el Árbitro Único una vez que sea declarada la solidaridad ordene a las empresas consorciadas devuelvan Solidariamente, a la Municipalidad Provincial de Picota la suma de S/13'860,568.22 (Trece Millones Ochocientos Sesenta Mil Quinientos Sesenta Y Ocho Y 22/100 Soles), más los intereses que se devenguen al momento de la emisión del laudo, y al momento de la ejecución del laudo.

#### **Posición del Contratista**

69. Respecto a la referida pretensión de devolución de adelantos contenida en la demanda de la Entidad, la Contratista no se ha pronunciado, puesto que no ha realizado o presentado contestación de la demanda, propuesto cuestiones probatorias, excepciones, objeciones u otros, menos así ha ofrecido medios probatorios que contradigan la pretensión de la Entidad.

#### **B.8. Respecto del octavo punto controvertido**

**Octavo Punto Controvertido:** Determinar si corresponde que el Árbitro Único ordene al Consorcio Picota asuma íntegramente los gastos arbitrales.

#### **Posición de la Entidad**

70. La Entidad declara que existe la necesidad de recurrir al arbitraje pues es necesario que vía arbitraje se dé por finalizada la controversia principal referida a la resolución del contrato realizada por la Entidad, así como otras como las consistente en lograr se ordene la devolución del monto de dinero que mantiene en su poder ilícitamente el Consorcio Picota.
71. En esta línea menciona la Entidad que las razones por las cuales se acude al arbitraje son, en este caso, propiciadas por el contratista, por lo que

los costos arbitrales deben de ser asumidos en su totalidad por el contratista.

#### **Posición del Contratista**

72. Respecto a este último punto controvertido y que decanta de la última pretensión contenida en la demanda de la Entidad, la Contratista no se ha pronunciado, puesto que no ha realizado o presentado contestación de la demanda, propuesto cuestiones probatorias, excepciones, objeciones u otros, menos así ha ofrecido medios probatorios que cuestiones dicho pedido.

#### **IV. CUESTIONES PRELIMINARES**

73. Antes de analizar y resolver las materias controvertidas, corresponde expresar lo siguiente:
- ✓ El Árbitro Único se constituyó de conformidad con lo establecido en el convenio arbitral suscrito entre las partes, así como al amparo de la normativa vigente.
  - ✓ La designación, aceptación e instalación del Árbitro Único se ajustó a las exigencias previstas en la ley de la materia.
  - ✓ Todo cuestionamiento realizado directa o indirectamente fue materia de discernimiento tanto en el cuaderno principal como en el cuaderno de medida cautelar.
  - ✓ Se presentó la demanda dentro del plazo dispuesto en las reglas del arbitraje.
  - ✓ Las partes fueron debidamente emplazadas con los escritos de demanda y se les concedieron los plazos legales para el ejercicio pleno de su derecho de defensa.
  - ✓ Ambas Partes tuvieron plena libertad para ofrecer y actuar todos los medios probatorios que consideren pertinentes, así como para expresar sus posiciones de hechos y de defensa sin limitación alguna, habiendo tenido ambas partes igual oportunidad para presentar sus alegaciones y conclusiones por escrito, así como para solicitar o realizar sus respectivos informes orales.

- ✓ De lo expuesto, se colige que el arbitraje se ha seguido en respeto estricto de los derechos de las partes; por tanto, se procede a analizar las posiciones de las partes, desde los aspectos fácticos, jurídicos y probatorios aportados al arbitraje. Especialmente, se prestará atención a los principios de la carga de la prueba, el cual consiste en que la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuren su pretensión, y el principio de adquisición procesal, el cual consiste en que las pruebas de una de las partes pueden resultar benéficas a los intereses de la contraria y, más aún, el juzgador ha de examinar y valorar las pruebas que obran en autos, a fin de obtener la verdad histórica que debe prevalecer en el caso justiciable o sometido a arbitraje.
- ✓ El análisis del presente caso y las conclusiones a las que arribe el Árbitro Único serán efectuadas de conformidad con la documentación que obra en el expediente arbitral, así como de la información que se desprende de los actuados, habiéndose tenido en cuenta en su integridad, aún en caso de no ser expresamente mencionada en el análisis.
- ✓ En tal sentido, el Árbitro Único dentro del plazo establecido, procede a emitir el laudo arbitral con el que pone fin a las controversias sometidas a arbitraje.

### **Normativa aplicable**

74. De acuerdo con la fecha de convocatoria<sup>2</sup> del procedimiento de selección del cual deriva el Contrato objeto de análisis en el presente caso arbitral, la norma aplicable es la Ley de Contrataciones del Estado Ley N° 30225 y su modificatoria<sup>3</sup>, así como su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF y su modificatoria<sup>4</sup> (en adelante, RLCE).
75. Igualmente, resulta aplicable al presente caso, el Decreto Legislativo

---

<sup>2</sup> La convocatoria del Procedimiento de Selección de LP-SM-1-2018-MPP-CS-1 fue publicada el 18 de enero del 2018.

<sup>3</sup> D. Leg. N° 1341.

<sup>4</sup> D. S. N° 056-2015-EF

Nº1071, Leyde Arbitraje vigente.

## **V. ANÁLISIS DEL ÁRBITRO ÚNICO**

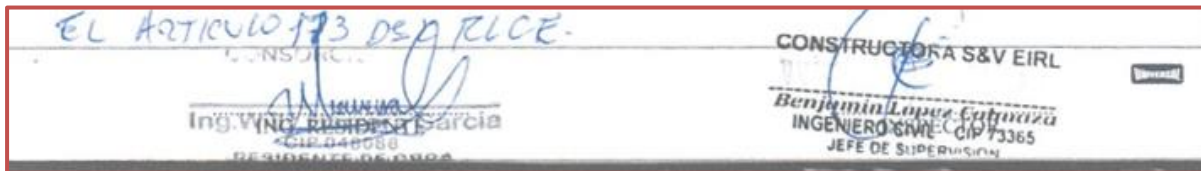
76. El presente arbitraje tiene como objeto dilucidar las controversias vinculadas con la resolución del Contrato efectuada por la Entidad y a partir de ello dirimir las demás controversias sometidas a discernimiento vía arbitraje administrativo.
77. Por ello, corresponde analizar el procedimiento de resolución de contrato con el marco de la normativa de las Contrataciones del Estado, según se desarrolla en las líneas siguientes.

### **A. Sobre el incumplimiento de obligaciones y la prerrogativa de resolver el contrato.**

78. En virtud del contrato administrativo perfeccionado el 17 de abril del 2018, el Contratista se comprometió a ejecutar la Obra, por un plazo de ejecución inicial de quinientos cuarenta (540) días calendario y por el monto inicial de S/48'880,000.00 (cuarenta y ocho millones ochocientos ochenta mil y 00/100 soles).
79. Ello implicaba en cuanto al contratista la responsabilidad de realizar correctamente la totalidad de las prestaciones derivadas de la ejecución del contrato. Para tal fin deberá realizar todas las acciones que estén a su alcance, empleando la debida diligencia, *apoyando el buen desarrollo contractual para conseguir los objetivos públicos previstos*; obligaciones contractuales explícitas según contenido del numeral 32.6 del Art. 32º - Contrato - de la LCE.
80. De igual modo el Art. 36º - Resolución de contrato - de la LCE establece dentro del numeral 36.1, la posibilidad de resolver el contrato por incumplimiento de obligaciones empero añade, *"conforme lo establecido en el reglamento"*. Asimismo, amplía el referido artículo en el numeral 36.2, *si es que el contrato es resuelto por causas imputables a alguna de las partes, "se deberá de resarcir los daños y perjuicios ocasionados"*.
81. En la misma línea de razonamiento el Art. 40º - Responsabilidad del contratista - de la LCE instituye al contratista, como responsable de

ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo de acuerdo con lo establecido en el contrato.

82. Bajo esta secuencia lógica resulta necesario, a partir de los medios probatorios aportados, establecer si los hechos expuestos se subsumen en el incumplimiento de obligaciones contractuales por parte del contratista y si dicho incumplimiento se encuentra sancionado con habilitar, en este caso, a la Entidad, en poder resolver el contrato, y de ser así, si es que existe formalidad expresa para ello y si la misma se cumplió.
83. Del asiento 999 del cuaderno de obra se puede indicar lo siguiente:
- a. Que este ha sido realizado por la supervisión de obra el 05 de julio del 2022 y es suscrito no solo por quien redacta el asiento (Ing. Benjamín López Cahuaza – CIP N° 73365), sino y, sobre todo, el que aparece o se encuentra acompañada de la firma del residente de obra (Ing. Willy Herrera García – CIP N° 048088).



- b. En dicho asiento se le imputa demoras injustificadas en la ejecución de obra (Art. 173 del RLCE), consistente en el incumplimiento de obligación contractual al haber ejecutado, para dicho momento, tan solo un 47.45% cuando según lo programado en el calendario de avance de obra vigente (Res. Alcaldía N° 286-2022MPP/A) debería obedecer a un 91.62% (según programación acumulada) y que dicho porcentaje de ejecución está por debajo del 80% de lo programado; concluyéndose que para dicho momento el porcentaje mínimo debería de ser igual o mayor a un 73.296% y que difiere notablemente del alcanzado (47.45%).

----- Continua en la siguiente página -----

SE CONJUNTA AL CONTRATISMO QUE SEGUN EVALUACION A LA PROGRAMACION Y/O CALENDARIO DE AVANCES DE OBRA NUESTRO APROBADO CON RESOLUCION DE ALCALDIA N° 286-2022 HPP/A CON FECHA 20 DE JUNIO DEL 2022. LA VALORIZACION DEL MES DE JUNIO 2022 EL AVANCE DE OBRA EJECUTADO ACUMULADO ES DE 47.45%, SIENDO EL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO DE 91.12, POR LO QUE EL AVANCE EJECUTADO ES MENOR AL 80% DEL PROGRAMADO, CAYENDO EN RETRASO INJUSTIFICADO SEGUN EL ARTICULO 173 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES.

- c. Igualmente se aprecia que se le solicita un nuevo calendario que contemple la aceleración de los trabajos para garantizar el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto.

SE SOLICITA AL CONTRATISTA PRESENTAR EL CALENDARIO ACUSANDO DE EJECUCION DE OBRAS EN CONCORDANCIA CON EL ARTICULO 173 DE LA LCE.

CONSTRUCTORA S&V EIRL  
Benjamin Lopez Caturiza  
INGENIERO CIVIL CIP 73365  
JEFE DE SUPERVISION

Ing. WILSON ESPINOSA  
RESIDENTE DE OBRAS

- d. Adicionalmente se observa que dicho asiento de cuaderno de obra establece que ya existe atrasos injustificados para abril y mayo del 2022. Asimismo, el que existe paralización parcial de la obra en distintos frentes y que no se encuentra presente en obra personal clave:

1. Especialista en estructura hidráulica
2. Especialista en seguridad e higiene ocupacional
3. Especialista electromecánico
4. Especialista en mecánica de suelos; y,
5. Especialista de estudio de tránsito.

84. En cuanto al contenido del contrato de obra, respecto a la resolución de contrato, debemos mencionar la "cláusula decimosexta: resolución de contrato", la que recoge la facultad de ambas partes de resolver el contrato por incumplimiento (numeral 32.3 del Art. 32° de la LCE), asimismo, añade o expresa dicha cláusula que la **Entidad procederá**



de acuerdo con lo establecido en los artículos 136° - Procedimiento de resolución de contrato- y 177° - Resolución de Contrato - del RLCE.

85. Es necesario antes de analizar los hechos y los artículos 136° y 177° del RLCE, detenernos previamente, en el supuesto del primer párrafo del Art. 173° - *Demoras injustificadas en la ejecución de la obra*- del RLCE consistente en el atraso injustificado por debajo del 80% de lo programado y que tiene como consecuencia inicial el "ordenar la presentación" de un nuevo calendario (acelerado) y que dicho instrumento documental deberá de ser entregado dentro de los siete (7) días siguientes de la orden o requerimiento.
86. Así, si el requerimiento – vía cuaderno de obra asiento N° 999- se realiza el 05 de julio del 2022, dicha obligación, la de *entregar un nuevo calendario que contemple la aceleración de los trabajos de modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto*, debería de haberse materializado, a más tardar, *el 12 de julio del 2022*, y para dicha fecha, según se expone, *el plazo contractual pendiente de ejecución es de 27 días calendarios (plazo vencía el 08 de setiembre del 2022)*.
87. Siguiendo con el análisis del Art. 173° - *Demoras injustificadas en la ejecución de la obra*- del RLCE, el segundo párrafo establece como sanción, ante la no presentación del calendario acelerado, la prerrogativa de:
- a) Ser considerada como causal para que opere la intervención económica; o,
  - b) La resolución del contrato.
88. Finalmente, es de añadir y precisar que el último párrafo del citado Art. 173° del RLCE establece que de suceder lo mismo en un segundo momento – atraso injustificado con el nuevo calendario (ejecución menor al 80% de lo programado)-, también constituye causal de resolución de contrato, no siendo necesario apercibimiento alguno al contratista de obra. Empero este es un supuesto que no encaja en los hechos materia de discernimiento, pues los hechos relatados obedecen a la no presentación del calendario acelerado y sus consecuencias.
89. Ahora bien, pasando al contenido del Art. 136° - Procedimiento de

resolución de contrato - del RLCE en cuanto a obras, establece previa a la resolución del contrato, la necesidad del requerimiento solicitándole el cumplimiento de sus obligaciones (Nótese que la cláusula decimosexta del contrato establece taxativamente que la Entidad deberá de proceder según lo establecido en el citado Art. 136° del RLCE).

90. Dicho requerimiento - el que cumpla con sus obligaciones bajo apercibimiento de resolverse el contrato - que recoge el citado Art. 136°, deberá de tener para el caso de obras, un plazo de 15 días como mínimo, y si se mantiene el incumplimiento vencido el plazo para corregirlo, se podrá resolver el contrato mediante comunicación notarial.
91. El camino reseñado contenido del primer al tercer párrafo del Art. 136° del RLCE, se encuentra **allanado o habilitado para cualquiera de las partes** al resolver el contrato<sup>5</sup>, *empero respecto a la Entidad no es el único camino o vía de la cual puede disponer.*
92. En efecto el **cuarto párrafo del dicho artículo (136°) contiene un segundo supuesto, exclusivo para la Entidad**, esto es el que pueda resolver el contrato sin que exista requerimiento previo, y para habilitar dicha prerrogativa, deberá de darse necesariamente el que **la situación de incumplimiento no pueda ser revertida**. A mayor detalle reproducimos la parte pertinente del cuarto párrafo del artículo 136 del RLCE:
- La Entidad puede resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento del contrato, cuando... la situación de incumplimiento no pueda ser revertida. En estos casos, basta comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato.*
93. En cuanto a comprobar la irreversibilidad del incumplimiento, para el caso en concreto, se debe pasar por analizar “la *obligación contractual de presentar del calendario acelerado*”, y las consecuencias que genera la no presentación dentro del plazo de *siete (7) días establecido por el marco legal contractual*.
94. Revisado el marco legal contractual bajo el cual las partes contrataron,

---

<sup>5</sup> Nótese que el artículo 136° estipula que este primer camino es para cualquiera de las partes perjudicadas sin distinción: “**Si alguna de las partes** falta al cumplimiento de sus obligaciones, **la parte perjudicada debe**...”.



el árbitro único entiende que de no haberse presentado el referido calendario y vencido el plazo, dentro de la LCE y su reglamento no existe una segunda oportunidad para ello, así se puede concluir dicha obligación no solo se habría incumplido, sino que, a entender del tribunal arbitral, las consecuencias resultarían irreversibles en sede administrativa, quedando a criterio de la entidad bien intervenir económicamente la obra o resolver el contrato.

95. Queda claro para el tribunal que la discusión en torno a la obligación incumplida, ya descrita, solo podría haberse rebatido en sede arbitral o vía conciliación, empero, la Contratista no ha realizado actividad alguna que le permita a este tribunal poder analizar si es que existen atrasos justificados o si existió imposibilidad no imputable al contratista, respecto a tal obligación.
96. Siempre en el sendero de la irreversibilidad del incumplimiento de las obligaciones del contratista se adicionan hechos consignados por la supervisión de obra<sup>6</sup> en el cuaderno de obra<sup>7</sup>, como lo es el que, para los meses anteriores (abril y mayo del 2022) ya existía retrasos injustificados no habiéndose solicitado el calendario acelerado debido a que no existía la aprobación del calendario de reinicio de obra.
97. Aparejado a los incumplimientos contractuales ya descritos debe tenerse como aditivo el resto del contenido del asiento de cuaderno de obra N° 999, pues se establece la falta del personal clave, como lo es el Ing. especialista en estructura hidráulica, seguridad e higiene ocupacional, electromecánico, mecánica de suelos y estudio de tránsito, este hecho deviene en otro incumplimiento contractual, pues el Art. 162° determina que es responsabilidad del contratista ejecutar la prestación con el plantel profesional ofertado.
98. Igualmente, el asiento expresa que existen doce (12) frentes que se mantiene paralizados, hecho que deviene como un claro indicio de que

---

<sup>6</sup> Según el numeral 160.1 del art. 160 del RLCE la Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del supervisor, quien es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica, y administrativa de la obra y el cumplimiento del contrato, además de la oportuna administración de riesgos durante todo el plazo de la obra...

<sup>7</sup> Según contenido del numeral 164.1 del artículo 164 del RLCE el cuaderno de obra recoge los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución.

las prestaciones no se estuvieron ejecutando según lo establecido dentro del contrato y la documentación generada para tal fin (ejecución contractual).

99. Suma como indicio revelador el que, para el vencimiento del plazo para la presentación del calendario acelerado, esto es para el 12 de julio 2022, cotejado con la fecha de término del plazo contractual (08 setiembre del 2022), solo quedaban 27 días calendarios, esto es el equivalente al 5% del plazo contractual inicial<sup>8</sup> (540 días calendarios)<sup>9</sup>; es decir existían 27 días calendarios para ejecutar el desfase (44.17%) más el saldo.
100. Así se colige que la situación fue irreversible en cuanto al incumplimiento y que de seguir el primer camino (primer párrafo) del Art. 136° del RLCE, ello hubiere implicado que posterior al 12 de julio<sup>10</sup> se le tendría que haber concedido un segundo y último plazo de 15 días para que cumpla con sus obligaciones contractuales. Pues de habersele requerido al día siguiente, esto es el 13 de julio más los 15 días (hasta el 28 de julio) nos deja un plazo contractual pendiente de tan solo 11 días calendarios a la fecha de culminación del plazo contractual (al 08 de setiembre del 2022).
101. Ello resulta ilógico en términos de posibilidad de ejecutar el porcentaje pendiente, el cual según el Informe Técnico N° 022-2022-CONST.S&V EIRL/ING BLCE-SO<sup>11</sup>, establece que "el saldo por ejecutar al 30 de junio del 2022 es del 52.55%", es decir, más de la mitad de toda la obra, y para dicho momento, emisión del informe técnico, solo existían treinta y nueve (39) días calendarios como plazo pendiente de ejecutar (vencimiento el 08 de setiembre del 2022) y un 52.55% de las

---

<sup>8</sup> De tomarse como referencia el plazo contractual inicial mas las ampliaciones dicho porcentaje disminuiría más aún.

<sup>9</sup> Nótese que según cuaderno de obra existe un 47.45% de ejecución cuando para dicho momento debería haberse ejecutado un 91.62%, es decir existe desfase o faltante de ejecución del 44.17%.

<sup>10</sup> Agréguese como dato adicional la carta N° 052-2022-CONST.SVEIRL/TG, la que ingresa a la Entidad el 25 de julio (a 14 días de vencerse el plazo contractual) y es emitida por la supervisión dando cuenta que para dicha fecha (25 de julio), que el contratista no ha presentado el calendario acelerado de ejecución de obra, incumpliendo el contenido del Art. 173° del RLCE.

<sup>11</sup> Página 42 del escrito de demanda (medios probatorios).

prestaciones contratadas.

102. Un elemento o hecho relevante para tener en cuenta es la formalidad de los asientos de obra, en donde el numeral 164.1 del artículo 164° del RLCE establece, inequívocamente, que al pie de cada anotación en el cuaderno de obra deberá de existir la firma del autor; por lo que según se verifica en el ya, tantas veces citado asiento N° 999, este se encuentra suscrito tanto por la supervisión como por el ingeniero residente. Así la autoría y contenido de dicho asiento, formalmente, se debe imputar a ambos profesionales (supervisor y residente).
103. De esta manera, el tribunal arbitral entiende que, el estado de incumplimiento contractual se muestra como evidente e irremediable<sup>12</sup>, tanto por la conducta omisiva del contratista al no presentar el calendario acelerado como por los hechos expuestos precedentemente. Prueba adicional es el que incluso existe la **renuncia del "Ingeniero Residente de Obra"**<sup>13</sup> quien mediante Carta N° 017-2022 (ingresada el 09 de setiembre del 2022) informa el haber **renunciado el 20 de julio del 2022** por limitaciones en la logística y económicas de la contratista, e incluso señala que, le adeudan 3 meses de su remuneración mensual, entre otros.
104. Queda mencionar que la resolución del contrato fue notificada o entregada por conducto notarial tal cual apreciamos de los sellos y rúbricas del Notario Público de la ciudad de Iquitos, Dr. Vladymir Villarreal Balbín, quien entregara dicho documento el 15 de setiembre del 2022. Con ello la formalidad: "...basta con comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato." establecido por el cuarto párrafo del artículo 136° – procedimiento de resolución del contrato – del RLCE, se habría cumplido.
105. Por todo ello el tribunal arbitral declara lo siguiente:

➤ **Fundada La Primera Pretensión Principal.** Se declara válida y

---

<sup>12</sup> Un indicio que se torna revelador como incentivo para no cumplir con las obligaciones contractuales por parte del contratista, es el que las cartas fianzas hayan vencido sin que el contratista las haya renovado pues incluso existe la Carta N° 508-2022-MPP/A con la que se le requiere la devolución de los montos adeudados por adelantos puesto que no existen cartas fianzas a ejecutar.

<sup>13</sup> El Ingeniero Residente de Obra según lo expresamente dispuesto por el numeral 154.2 del el Art. 154 del RLCE, por su sola designación, representa al contratista como responsable técnico de la obra.

con efectos legales la declaración de resolución del contrato de la obra "Ampliación Y Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado En Villanueva - Pucacaca - Chinchá Alta - Shimbillo – Nuevo Codo – Picota - Santa Rosillo - San Antonio - Nueva Unión – Winge Caspizapa, Pto. Rico, San Hilarión, Provincia De Picota - San Martín" realizada por la Entidad mediante Resolución de Alcaldía N° 457-2022-MPP/A y comunicada por conducto notarial, al Consorcio Picota, mediante carta N° 507-2022-MPP/A.

**B. Sobre el efecto y validez de la resolución de Alcaldía N° 481-2022-MPP/A y la resolución de Alcaldía N° 457-2022-MPP/A.**

106. Al respecto se aprecia que la resolución de alcaldía N° 481-2022-MPP/A resuelve rectificar errores materiales detectados en la resolución de alcaldía N° 457-2022-MPP/A consistentes en mencionar el número de asiento (el correcto se establece en el N° 999 y no el consignado por error 1001) y la fecha (la fecha correcta es el 05 de julio y no el 06 de julio).
107. Ahora bien, la formalidad para la resolución contractual establecida en el tercer párrafo del Art. 136° del RLCE no establece que se tenga que mencionar el número de asiento en el que se realizó el requerimiento del calendario acelerado, sino el que se realice dicho requerimiento por la Supervisión vía cuaderno de obra, menos así, existe supuesto de nulidad de la resolución del contrato por acometer error al mencionar el número de asiento o la fecha de este asiento.
108. Las normas citadas al desarrollar y analizar la primera pretensión no contienen supuesto de nulidad o anulabilidad ante tales errores, es más, no recogen, siquiera, la exigencia de establecer el número de asiento o la fecha de este y que dicha omisión acarree la nulidad o anulabilidad del acto administrativo con el que se resuelve el contrato, incluso es de adicionar que al respecto el RLCE no establece que la resolución del contrato tenga que realizarse bajo la formalidad de una resolución de alcaldía.
109. Aunado a ello, cabe destacar que, el art. 8° del TUO de la LPAG (Ley N°

27444) instituye que un acto administrativo es válido en cuanto es dictado conforme al ordenamiento jurídico, así del análisis realizado precedentemente se puede arribar a la conclusión de que el acto de resolución del contrato se ha ejecutado conforme al marco jurídico aplicable al contrato administrativo de ejecución de obra.

110. El tribunal arbitral corea, en sede nacional, al administrativista Juan Carlos Morón Urbina, en su obra Comentarios a la LPAG, en donde expresa que la validez está referida a haberse emitido conforme a las normas jurídicas vigentes ordenadoras de dicha actuación y que consta de todos los elementos esenciales (Competencia<sup>14</sup>, objeto o contenido<sup>15</sup>, finalidad publica<sup>16</sup>, motivación<sup>17</sup> y procedimiento regular<sup>18</sup>); de esta manera los errores anotados y que fueran materia de posterior corrección no quebrantan la validez del acto administrativo de resolución de contrato pues no transgreden el marco normativo o afecta o elimina los elementos del acto administrativo.

111. Por otro lado, el Art. 212° del TUO de la LPAG (ley N° 27444) prevé la posibilidad de la corrección de errores materiales o aritméticos, esto con efecto retroactivos y siempre que se realice bajo las mismas formas y modalidades de comunicación o publicación que corresponda al acto original.

112. Asimismo, la segunda pretensión está referida a determinar el "efecto y validez de la resolución de alcaldía 481-202-MPP/A en cuanto no enerva o altera el contenido de la resolución de alcaldía N° 457-2022-MPP/A

---

<sup>14</sup> Ser emitido por el órgano facultado debido a la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, a través de la autoridad regularmente nominada al momento del dictado y en caso de órganos colegiados, cumpliendo los requisitos de sesión, quórum y deliberación indispensables para su emisión.

<sup>15</sup> Los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal modo que pueda determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Su contenido se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible física y jurídicamente, y comprender las cuestiones surgidas de la motivación.

<sup>16</sup> Adecuarse a las finalidades de interés público asumidas por las normas que otorgan las facultades al órgano emisor, sin que pueda habilitarse a perseguir mediante el acto, aun encubiertamente, alguna finalidad sea personal de la propia autoridad, a favor de un tercero, u otra finalidad pública distinta a la prevista en la ley. La ausencia de normas que indique los fines de una facultad no genera discrecionalidad.

<sup>17</sup> El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico.

<sup>18</sup> Antes de su emisión, el acto debe ser conformado mediante el cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para su generación.

comunicada mediante carta N° 507-2022-MPP/A al tratarse de una rectificación de oficio”.

113. En cuanto a ello se estima que la resolución de alcaldía 481-202-MPP/A no podría enervar de manera algún el contenido y efecto de la resolución N° 457-2022-MPP/A, pues como se menciona “atribuirles a estos errores o equivocaciones un efecto sobre la eficacia del acto carecería de todo fundamento racional” (Morón, 2014, p.143-142).
114. El ya indicado artículo 212° del actual TUO de la LPAG (ley N° 27444) prevé la potestad de la administración pública de rectificar sus propios errores, empero dichos errores se limitan, entre otros, a los “errores materiales”, como lo sería un error de expresión, un error gramatical o un error aritmético (discrepancia numérica). Entendiéndose al error material como un error de transcripción, mecanográfico o de digitación o un error de expresión en la redacción del documento. En palabras de Juan Carlos Morón Urbina, constituye “un error atribuible no a la manifestación de voluntad o razonamiento contenido en el acto, sino al soporte material que lo contiene.” (Morón, 2017. P. 145).
115. Así las cosas, el tribunal arbitral, entiende que la existencia o inexistencia de la resolución de alcaldía N° 481-202-MPP/A en nada enerva el efecto o validez de la resolución N° 457-2022-MPP/A.
116. Por ende, el árbitro único declara lo siguiente:
- Declarar **Fundada En Parte la Pretensión Subordinada a la Primera Pretensión Principal**, declarando que la existencia o inexistencia de la resolución de alcaldía N° 481-2022-MPP/A no enerva la validez y efectos de la resolución de alcaldía 457-2022-MPP/A.

### **C. Sobre la Adenda N° 03, Segunda Cláusula, al contrato de Consorcio Picota.**

117. Es de considerar la existencia de un contrato de consorcio<sup>19</sup>: “Consorcio

---

<sup>19</sup> Según el Anexo Único – Anexo de definiciones del RLCE, el Consorcio es entendido como un contrato

Picota”<sup>20</sup> con firmas legalizadas y fechado 12 de abril el 2018, conformado por las empresas:

- **H & M Ingenieros Consultores Y Constructores SAC:** A quien según el contenido de la “**Cláusula Séptima: De La Participación Y Responsabilidad**” **se le asigna una participación del 70%** respecto a la administración de la obra, ejecución contractual de la obra, afianzar al consorcio con las cartas fianzas de fiel cumplimiento, adelanto directo y adelanto de materiales, así como la elaboración y presentación de la oferta.
- **Becerra Hnos. Contratistas Generales SAC:** A quien según el contenido de la “**Cláusula Séptima: De La Participación Y Responsabilidad**” **se le asigna un 20%** en cuanto a la administración de la obra, ejecución contractual de la obra, afianzar al consorcio con las cartas fianzas de fiel cumplimiento, adelanto directo y adelanto de materiales.
- **CONASSA SRL:** A quien según el contenido de la “**Cláusula Séptima: De La Participación Y Responsabilidad**” **se le asigna una participación del 10%** respecto a la ejecución de la obra.

118. Posteriormente, el 18 de agosto del 2022, se suscribe la Adenda N° 03<sup>21</sup> al contrato de consorcio Picota, dentro de dicha adenda se establece en el numeral “Segundo” el “Objeto de la Adenda”, siendo esta la siguiente:

**SEGUNDO: OBJETO DE LA ADENDA**

En virtud de la presente adenda los Consorciados acuerdan dejar sin efecto la designación del Representante Legal Sr, **JORGE LUIS CUBAS SANCHO**, identificado con DNI N° 47378371, la que surte todos sus efectos, a partir de la fecha; dejando constancia que todas las actividades que se encuentran dentro de sus facultades y hasta el 27 de julio del 2022, tienen plena vigencia, declarando Nulo y sin efecto jurídico las actividades realizadas excediéndose en su facultades previstas en el contrato de Consorcio específicamente las cartas N° 085-2022, de 5 de agosto y la N° 090-2022, de fecha 12 de agosto del 2022; en consecuencia acuerdan designar un nuevo representante legal, Y se acuerda modificar la Cláusula Quinta del Contrato original del **CONSORCIO PICOTA**, el mismo que quedara redactado de la siguientes forma :

asociativo por el cual dos o mas personas se asocian, con el criterio de complementariedad de recursos, capacidades y aptitudes, para contratar con el Estado.

<sup>20</sup> Páginas 65 a 73 (medios Probatorios) del escrito de demanda.

<sup>21</sup> Páginas 76 a 78 (medios Probatorios) del escrito de demanda.



119. Es decir, los acuerdos serían:

- Dejar sin efecto o remover en el cargo de representante legal (representante común) al Sr. Jorge Luis Cubas Sancho, desde la fecha de la suscripción de la adenda N° 03 (18 de agosto).
- Todas las actividades que se encuentren dentro de sus facultades hasta el 27 de julio (23 días hacia atrás del acuerdo) se mantiene validas o “tienen plena vigencia”.
- Declaran nulo y sin efecto jurídico las actividades realizadas excediéndose en sus facultades previstas en el contrato de consorcio, específicamente las cartas N° 085-2022 (05 agosto) y la N° 090-2022 (12 de agosto).
- Finalmente nombran como “representante legal común” a la Srta. Karen Socorro Pérez Mermao.

120. En cuanto a la participación en consorcio dentro de los distintos procedimientos de selección que ostenta la LCE y su reglamento, esta modalidad de participación es válida pues dicho supuesto ha sido recogido tanto por la LCE como por su reglamento, así el numeral 13.1 del art. 13° de la LCE establece dicha posibilidad.

121. Empero dicha modalidad de participación y ejecución se encuentra reglada, pues tanto la LCE, como su reglamento y el organismo supervisor (OSCE) han establecido márgenes, formalidades y obligaciones para el consorcio y los consorciados.

122. Para empezar con las reglas establecidas para los consorcios debemos mencionar el art. 118 – Contrato de consorcio – del RLCE el cual **establece expresamente la necesidad y obligación de que los consorciados designen a “un representante común”** (en este caso lo fue el Sr. Jorge Luis Cubas Sancho) y a reglón seguido se establece lo siguiente:

**“No tienen eficacia legal frente a la Entidad contratante los actos realizados por personas distintas al representante común.”**

123. Solo hasta aquí es de verse que los actos con los cuales, los consorciados, dejan sin efecto los actos contractuales (documentales) realizados por el representante común no tiene asidero frente a la



Entidad, pues existe la imposición de validez de ellos por el reglamento de la LCE, ya que los representantes legales de las empresas consorciadas dentro de la ejecución del contrato administrativo de ejecución de obra, frente a la Entidad, se convierten “en personas distintas al representante común”, es decir no tienen la representación legal para realizar actos contractuales dentro de un contrato administrativo de ejecución de obra.

124. De igual manera el organismo supervisor – OSCE – tiene la prerrogativa de emitir Directivas en cuanto a la participación en consorcios<sup>22</sup>, por lo que, ubicados en el tiempo, deriva en inevitable analizar la Directiva N° 06-2017 (publicada el 03 de marzo del 2017) en la que se puede apreciar que se reglamente tanto la promesa de consorcio, el contrato de consorcio, como los extremos que pueden ser materia de modificación por lo consorciados.
125. En el extremo del contenido de la promesa de consorcio, se define o desarrolla los alcances de las facultades del representante común, tanto a nivel del procedimiento de selección como dentro del perfeccionamiento del contrato y su ejecución; así se puede observar:

**b) La designación del representante común del consorcio.** Dicho representante tiene facultades para actuar en nombre y representación del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad o liquidación del contrato, según corresponda.

126. Ello implica, a razonamiento del tribunal arbitral que, el contratista no puede limitar, modificar, ampliar o cercenar las facultades del representante común frente a la Entidad, pues tanto el reglamento de la LCE como la Directiva N° 06-2017-OSCE/CD (aplicable en el tiempo) establecen e imponen para los contratos administrativos de ejecución de obras las expresas facultades con las que contará la persona a

<sup>22</sup> Según lo dispuesto por el último párrafo del Art. 118° del RLCE.

designarse como representante común (representante legal).

127. De igual manera el tribunal arbitral entiende como ilógico el que se le quiera dotar de efectos retroactivos a los acuerdos que pacten los consorciados respecto a la Entidad, Más aún, la citada Directiva establece que los únicos extremos materia de modificación del contrato de consorcio, son los literales “d” (representante común) y “c” (domicilio) y que ***cualquier modificación, surten efectos respecto a la Entidad, a partir de la fecha en que se notifique por vía notarial.***

128. Por tanto, el Árbitro Único resuelve lo siguiente:

- ✓ Declarar ***Fundada La Segunda Pretensión Principal*** de la Entidad, por lo que el Tribunal Arbitral Unipersonal establece que los acuerdos realizados por los consorciados contenidos en “Objeto de la Adenda de la Adenda N° 3 del Contrato de Consorcio Picota”, de fecha 18 de agosto del 2022, resulta nulos e ineficaces respecto a la Entidad, por cuanto contravienen el marco normativo aplicable al contrato administrativo de ejecución de obra.

**D. Sobre la Carta N°085-2022 (5 de agosto) y la Carta N° 90-2022 (12 de agosto).**

129. En cuanto a la posible comunicación realizada por el Consorcio Picota en cuanto al cambio de “representante común” debemos de detenernos en analizar dicho documento, esto es el documento signado “CP.120.2022” (con sello de “recibido” el 16 de setiembre del 2022).

130. Mediante el referido documento, la Srta. Karin S. Pérez Mermao, comunica a la Entidad que, ***la adenda al contrato de consorcio ha sido “Suscrita Por Mayoría”***. Tal cual se aprecia en la siguiente imagen:

----- Continua en la siguiente página -----



 <b>H&amp;M Ingenieros</b> Consultores y Constructores S.A.C.	 <b>BECERRA HNOS.</b> Contratistas Generales S.A.C.	 <b>CONASSA SRL</b>
<b>CONSORCIO PICOTA</b> URB. FRANCISCO BOLOGNESI D-8-IQUITOS-MAYNAS-LORETO		
<p>Iquitos, 09 de setiembre del 2022.</p> <p>CP.120.2022</p> <p>Señor: <b>JUAN DEDICACION TOCTO PILCO</b> Alcalde de la Municipalidad Provincial de Picota Jr. Miguel Grau N° 396-Picota-San Martin</p> <div style="text-align: right;"></div> <p><b>Asunto : ACREDITA REPRESENTANTE LEGAL – OTROS</b></p> <p><b>Referencia:</b> Obra: "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en Villanueva, Pucacaca, Chinchá Alta, Shimbillo, Nuevo Codo, Picota, Santa Rosillo, San Antonio, Nueva Unión, Winge, Caspizapa, Puerto Rico, San Hilarión – Provincia de Picota – San Martín"</p> <p>De mi especial consideración;</p> <p>Por el presente, y de conformidad con la adenda al contrato de Consorcio Suscrita por mayoría, hago de su conocimiento que se ha dejado sin efecto la designación del Sr. Jorge Luis Cubas Sancho, y se me ha designado como representante legal del Consorcio Picota, conforme a lo establecido en la adenda N° 03, al Contrato de Consorcio.</p>		

131. Es decir, no participaron todos los consorciados o contratantes del contrato de consorcio y al no participar todos los consorciados en la modificación del contrato de consorcio (en el extremo permitido por el marco normativo) no puede ser entendido como válido frente a la Entidad.
132. A mayor precisión, en el cambio del representante común (adenda N° 03) **no obra o se visualiza la firma legalizada del representante de la empresa contratante del contrato de consorcio: Becerra Hermanos Contratistas Generales SAC.**
133. De igual manera indica la Srta. Karin S. Pérez Mermao que, los actos realizados por el representante común - Sr. Jorge Luis Cubas Sancho - son "nulos de puro derecho", que dichos actos han sido desconocidos por los consorciados, y finalmente indica la vigencia de las cartas notariales de resolución de contrato realizada por el representante común - Sr. Jorge Luis Cubas Sancho -.
134. Al respecto, según el marco normativo – Art. 118° del RLCE – los actos

realizados por los consorciados no surten efectos frente a la Entidad, e incluso, el tribunal arbitral entiende que, aún todos los consorciados no podrían retirar la validez a los actos realizados por el representante común frente a la Entidad, ya que el marco legal del contrato administrativo no les irroga dicha prerrogativa.

135. Es de añadir que el documento signado N° CP.120.2022 en el caso negado de que este se ajustara a los parámetros normativos descritos precedentemente, aun así, no cumpliría con la formalidad para que surta efectos frente a la Entidad.
136. En efecto, la Directiva N° 06-2017-OSCE/CD (aplicable en el tiempo) "Participación De Proveedores En Consorcio En Las Contrataciones Del Estado" establece expresamente que solo podrá modificarse la designación del representante común y el domicilio del consorcio, asimismo, los efectos de dicha modificación surten efectos, frente a la Entidad, a partir de la entrega por Notario Público, tal cual se refleja de la siguiente imagen:

## **2. Modificación del contenido**

La información contenida en los literales a), d) y e) del numeral precedente **no puede ser modificada**, con ocasión de la suscripción del contrato de consorcio, ni **durante la etapa de ejecución contractual**. En tal sentido, no cabe variación alguna en la conformación del consorcio, por lo que no es posible que se incorpore, sustituya o separe a un integrante.

Para modificar la información contenida en los literales b) y c) del numeral precedente, **todos los integrantes del consorcio deben suscribir el acuerdo que dispone la modificación adoptada**, el cual surtirá efectos a partir de la fecha en **que se notifique por vía notarial a la Entidad**.

137. Así de una simple revisión del documento signado "CP.120.2022" se aprecia que no contiene sello o distintivo alguno que acredite la entrega por conducto notarial.
138. Por los fundamentos desarrollados precedentemente respecto a la segunda pretensión principal, el árbitro único, resuelve lo siguiente:
- ✓ Declarar **Fundada La Segunda Pretensión Principal** del

Contratista, por lo que el Tribunal Arbitral Unipersonal establece que el íntegro de los actos realizados por el representante común, Sr. Jorge Luis Cubas Sancho, se mantienen válidos y con efecto legal respecto a la Entidad, ello incluye el contenido y validez de las cartas N° 085-2022 (5 de agosto) y la carta N° 90-2022 (12 de agosto).

**E. Sobre la responsabilidad patrimonial solidaria, individual o conjunta de los consorciados y la exoneración del consorciado CONASA SRL de responsabilidad, administrativa, tributaria, judicial, penal y/u otro relacionado con la ejecución del objeto contractual.**

139. Tal como ya se ha señalado respecto al consorciado CONASSA SRL, según el contenido de la "Cláusula Sétima: De La Participación Y Responsabilidad" se le asigna una participación del 10% respecto a la ejecución de la obra, empero en la parte final de la referida cláusula sétima, los consorciados exoneran a dicha empresa "de toda responsabilidad administrativa, tributaria, judicial, penal y/u otro relacionado con la ejecución del objeto contractual..."
140. En primer lugar, corresponde indicar que, según la LCE y su reglamento, así como el D.L. N° 1017 decreto legislativo que norma el arbitraje, establecen que pueden ser sometidas a arbitraje las controversias sobre materias de libre disposición conforme a derecho, así como aquellas autorizadas por ley.
141. De esta manera resulta indiscutible que el tribunal arbitral no es competente para establecer la exoneración o no de responsabilidad tributaria, penal o judicial del consorciado CONASSA SRL. Por lo que dicho extremo de la pretensión deberá de ser rechazado por el tribunal arbitral.
142. Ahora bien, en cuanto al contrato de consorcio dentro de la LCE, el artículo 13° - numeral 13.2 – establece que los integrantes del consorcio son responsables solidariamente ante la Entidad por las consecuencias derivadas de su participación durante la ejecución del contrato, pues resulta indispensable el que dicha figura asociativa – Consorcio – se

aproveche de manera responsable y adecuada con la trascendencia que tiene para la sociedad la eficiente ejecución de los contratos que el Estado celebra para proveerse de bienes, servicios u obras.

143. Así las cosas, bajo esta primera línea CONASSA SRL es responsable solidario de las consecuencias derivadas de su participación en la ejecución contractual; empero en cuanto a infracciones y sanciones, resulta pasible la individualización si es que el contrato de consorcio así lo establece. Esto último es reforzado por el organismo supervisor en la Directiva N° 06-2017-OSCE/CD (aplicable en el tiempo), en la que establece explícitamente en el numeral 6.4, lo siguiente:

6.4. Los integrantes del consorcio son responsables solidariamente ante la Entidad por las consecuencias derivadas de su participación durante la ejecución del contrato derivado de este, conforme al artículo 13 de la Ley. De otro lado, de acuerdo con el artículo 220 del Reglamento, las infracciones cometidas por un consorcio durante el procedimiento de selección y la ejecución del contrato se imputan a todos los integrantes del mismo, aplicándose a cada uno de ellos la sanción que le corresponda, salvo que, por la naturaleza de la infracción, la promesa formal o contrato de consorcio, o cualquier otro medio de prueba documental, de fecha y origen cierto, pueda individualizarse la responsabilidad. La carga de la prueba de la individualización corresponde al presunto infractor.

144. En cuanto a los efectos patrimoniales, la Directiva en comento (06-2017-OSCE/CD) establece expresamente en el numeral 7.9, la responsabilidad patrimonial solidaria, a mayor abundamiento citamos:

**"7.9. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL SOLIDARIA**

*Los integrantes de un consorcio se encuentran obligados solidariamente a responder frente a la Entidad por los efectos patrimoniales que esta sufra como consecuencia de la actuación de dichos integrantes ya sea individual o conjunta, durante el procedimiento de selección y la ejecución contractual."*



145. A partir de los argumentos desarrollados precedentemente, el tribunal arbitral establece lo siguiente:

- ✓ Declarar ***Fundada en parte la Tercera Pretensión Principal de la demanda***, por lo que el Tribunal Arbitral Unipersonal reafirma la responsabilidad solidaria de todos los integrantes del consorcio Picota frente a la Municipalidad Provincial de Picota por los efectos patrimoniales consecuencia de la actuación individual o conjunta, durante la ejecución del contrato administrativo de ejecución de obra, dejando a salvo el derecho de la referida Entidad para que recurra a las autoridades competentes para establecer otro tipo de responsabilidades.

**F. Respecto a que se establezca la solidaridad en la devolución de la suma de S/13´860,568.22 (Trece Millones Ochocientos Sesenta Mil Quinientos Sesenta Y Ocho Y 22/100 Soles), más intereses.**

146. Es de apreciarse que el tribunal arbitral unipersonal, mediante Orden Arbitral N° 04 (resolutivo sétimo) del 07 de diciembre del 2022, requirió la presentación de informes por las áreas competentes de la Entidad, requerimiento que fue atendido mediante escrito de fecha 19 de diciembre del 2022, con el cual presentan:

- a) Informe N° 138-2022-GIDT-GM/MPP (emitido por el Gerente de Infraestructura y Desarrollo Territorial).
- b) Informe N° 398-2022-SGOL-GIPT/MPP (emitido por el Subgerente de Obras y Liquidaciones).
- c) Informe N° 197-2022/JHFS-AT-SGOL/MPP

147. El Informe N° 197-2022/JHFS-AT-SGOL/MPP del 15 de diciembre del 2022, emitido por el Ing. Jimmy H. Fasanando Sinti – Analista Técnico de la Municipalidad Provincial de Picota, expone en cuanto a los adelantos lo siguiente:

----- Continua en la siguiente página -----



### **ADELANTO DIRECTO**

Adelanto Directo N°01	
Adelanto Directo Contractual	S/. 4'888.000.00
Fecha del adelanto directo otorgado	21/04/2018

Adelanto Directo N°02	
Adelanto Directo Contractual	S/. 2'444.000.00
Fecha del adelanto directo otorgado	10/08/2020

### **ADELANTO POR MATERIALES**

Adelanto Por Materiales N°01	
Adelanto por Materiales contractual	S/. 9'776,000.00
Fecha del adelanto de Materiales otorgado	23/10/2018

Adelanto Por Materiales N°02	
Adelanto por Materiales contractual	S/. 2'444.000.00
Fecha del adelanto de Materiales otorgado	30/11/2020

148. Es decir, vía adelanto directo y adelanto por materiales existe un total de S/ 19'552,000.00 (Diecinueve millones quinientos cincuenta y dos mil con 00/100 soles).
149. De igual modo en cuanto a las amortizaciones realizadas, el referido informe expone:

### **AMORTIZACION ADELANTO DIRECTO**

Amortización Adelanto Directo N°01	S/. 2'314.262.46
Falta por Amortización Adelanto Directo N°01	S/. 2'573.737.54

Amortización Adelanto Directo N°02	S/. 172.906.90
Falta por Amortización Adelanto Directo N°02	S/. 2'271.093.10

### **AMORTIZACION ADELANTO DE MATERIALES**

Amortización Adelanto de Materiales N°01	S/. 3'382.624.14
Falta por Amortización Adelanto de Materiales N°01	S/. 6'393.375.86

Amortización Adelanto de Materiales N°02	S/. 0'000.000.00
Falta por Amortización Adelanto de Materiales N°02	S/. 2'444.000.00

150. Estableciendo un saldo de S/13'860,568.22 (Trece Millones Ochocientos Sesenta Mil Quinientos Sesenta Y Ocho Y 22/100 Soles).
151. Dicho informe es asumido o hecho suyo a través del Informe N° 138-2022-GIDT-GM/MPP del 15 de diciembre del 2022 por el Gerente de

Infraestructura y Desarrollo Territorial Municipal, Sr. Juan Manuel Morales Rojas, así como por el Subgerente (DT) de Obras y Liquidaciones de la Comuna, Ing. Steven C. Rodas Tenaza mediante el informe N° 389-2022-SGOL-GIDT/MPP.

152. Queda señalar que los referidos informes fueron incorporados al bagaje documental probatorio del expediente arbitral mediante Orden Arbitral N° 06 del 23 de diciembre del 2022, notificada en la misma fecha.
153. Al respecto el tribunal arbitral advierte que en el presente arbitraje obra medida cautelar (cuaderno cautelar) en el que, entre otros, se solicitó y obtuvo la ejecución de la carta fianza de fiel cumplimiento por el monto de S/ 4'888,000.00 (Cuatro millones ochocientos ochenta y ocho mil con 00/100 soles). Asimismo, ante posibles irregularidades advertidas se remitió la información y documentación a las distintas autoridades competentes como el Ministerio Público.
154. Respecto a dicha ejecución (carta fianza de fiel cumplimiento), la Entidad, con escrito de fecha 29 de diciembre del 2022 remitido al tribunal arbitral vía correo electrónico en la misma fecha, informa la ejecución de la referida carta fianza mediante cheque de gerencia BBVA N° 00044145 1 011 661 0900000019 61 (23set2022) y que fuera depositado en la cuenta de la comuna (Banco de la Nación) N° 00-545-004461 el 17 de noviembre del 2022.
155. Al respecto el Tribunal Arbitral entiende que la garantía de fiel cumplimiento tiene efectos resarcitorios, lo que se puede desprender tanto del contenido del Art. 137° - efectos de la resolución- del RLCE al establecer que la ejecución de las garantías resulta independiente frente a la posibilidad de una indemnización por mayores daños irrogados, concordante con el extremo final del numeral 2° del Art. 131° - ejecución de garantías - del RLCE el cual determina que el monto de las garantías ejecutadas corresponden íntegramente a la Entidad independientemente de la cuantificación del daño irrogado.
156. De igual manera, en cuanto a los intereses solicitados por la Entidad, es de atender que la LCE y su reglamento establecen puntualmente casos en los que los adeudos u otros de contenido económico generan intereses, así puede denotarse que por ejemplo el numeral 39.3 del

artículo 39° – Pago- de la LCE establece, ante el retraso del pago por la Entidad, la generación de intereses legales a favor del Contratista, empero en el artículo 183° - Amortización de adelantos – de la LCE no obra expresamente a favor de la Entidad la generación de intereses, pues solo se menciona que dicha amortización puede ser realizada, incluso, en la liquidación de obra.

157. Es de adicionar respecto a la pretensión de pago de intereses que, al revisar la demanda arbitral, dentro de ella, no obra o contiene el sustento bajo el cual normativamente se ampara dicha pretensión, de igual manera no obra medio probatorio que acredite o cuantifique la pretensión; por todo ello, el tribunal arbitral entiende que no es competente para dirimir dicho extremo controvertido, dejando a salvo el derecho de la Entidad de que pueda recurrir al fuero común (PJ) para dicho fin.

158. A partir de los argumentos desarrollados precedentemente, el tribunal arbitral establece lo siguiente:

- ✓ Declarar ***Fundada la Cuarta Pretensión Principal de la demanda***, por lo que el Tribunal Arbitral Unipersonal determina como monto pendiente de devolución la suma de S/13'860,568.22 (Trece Millones Ochocientos Sesenta Mil Quinientos Sesenta Y Ocho Y 22/100 Soles) a favor de la Entidad, dejando a salvo el derecho de la Entidad de recurrir al fuero común a efectos de discutir la generación y cobro de intereses.

#### **G. Sobre la condena de los costos o gastos arbitrales**

159. Sobre el particular, el inciso 2° del artículo 56° de la Ley de Arbitraje dispone que se debe formular pronunciamiento en el laudo sobre la distribución de los costos del arbitraje. Para ello, los costos del presente arbitraje están regulados en el artículo 70° de la Ley de Arbitraje, el cual es citado a continuación:

##### **"Artículo 70.- Costos**

El tribunal arbitral fijará en el laudo los costos del arbitraje. Los costos del arbitraje comprenden:

- a) Los honorarios y gastos del tribunal arbitral.
- b) Los honorarios y gastos del secretario.
- c) Los gastos administrativos de la institución arbitral.
- d) Los honorarios y gastos de los peritos o de cualquier otra asistencia requerida por el tribunal arbitral.
- e) Los gastos razonables incurridos por las partes para su defensa en el arbitraje.
- f) Los demás gastos razonables originados en las actuaciones arbitrales.”

160. Adicionalmente, el inciso 1º del artículo 73º de la Ley de Arbitraje rotula lo siguiente:

“El tribunal arbitral tendrá en cuenta a efectos de imputar o distribuir los costos del arbitraje, el acuerdo de las partes. A falta de acuerdo, los costos del arbitraje serán de cargo de la parte vencida. Sin embargo, el tribunal arbitral podrá distribuir y prorratear estos costos entre las partes, si estima que el prorrateo es razonable, teniendo en cuenta las circunstancias del caso.”

161. En consecuencia, el Árbitro Único ha apreciado que durante el curso del arbitraje la Entidad ha actuado basada en la existencia de razones para litigar que a criterio del tribunal resultan atendibles, y que, por ello, ha litigado honestamente, con respeto y convencida de sus posiciones ante la controversia, no solo en cuanto a la validez y eficacia de la resolución contractual (a favor de la Entidad), sino también sobre las consecuencias o afectaciones económicas sufridas. Por consiguiente, considera que existe la necesidad de condenar a la parte vencida (Contratista) al pago exclusivo de los gastos del arbitraje.

162. Así, pasamos a liquidar los gastos expresados por la Entidad, en el escrito, ya citado, del 19 de diciembre del 2022, siendo estos los siguientes:

- a) Total: Gastos Administrativos (institución Arbitral): S/ 201,916.97 (Doscientos un mil novecientos dieciséis con 97/00 Soles).

- b) Total, Honorarios Arbitrales: S/ 257,235.88 (Doscientos cincuenta y siete mil doscientos treinta y cinco con 88/100 soles), más los impuestos que correspondan.
- c) Defensa Técnica: S/ 16,200 (Dieciséis mil doscientos con 00/100 Soles).
- d) Esta liquidación practicada por la Entidad debe de contrastarse con la liquidación que ha realizado el Centro de Arbitraje que se muestra continuación:

SUSTENTO	GASTOS AMINISTRATIVOS	HONORARIOS TRIBUNAL ARBITRAL
Orden Arbitral N° 01	S/110,770.03	S/151,011.00
Orden Arbitral N° 04	S/ 44,227.00	S/ 80,050.00
Orden Arbitral N° 04	S/ 6,173.48	S/ 9,475.43
De la Medida Cautelar	S/ 12,000.00	S/ 12,000.00
Otros gastos administrativos	S/ 4,500.00	
SUB – TOTAL	S/177,670.51	S/252,536.43
TOTAL	S/430,206.94	
Cuatrocientos Treinta MI Doscientos Seis Y 94/100 Soles (Más Impuestos De Ley)		

163. El Árbitro Único declara:

- ✓ **Fundada en parte la quinta pretensión principal de la demanda**, en tal sentido declara parte vencedora a la Entidad por lo que la Contratista deberá de asumir los costos de arbitraje en la suma total de S/430,206.94 (Cuatrocientos Treinta MI Doscientos Seis Y 94/100 Soles), más los impuestos que correspondan.

## **VI. LAUDA:**

**PRIMERO:** Declarar **FUNDADA** la primera pretensión principal de la demanda de la Entidad, por lo que corresponde declarar válido y con efectos legales la declaración de resolución del contrato de la obra "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en Villanueva - Pucacaca - Chincha Alta - Shimbillo – Nuevo Codo – Picota - Santa Rosillo - San Antonio - Nueva Unión – Winge Caspizapa, Pto. Rico, San Hilarión, Provincia De Picota - San Martín" realizada por la Entidad mediante Resolución de Alcaldía N° 457-2022-MPP/A y comunicada por conducto notarial, al Consorcio Picota, mediante carta N° 507-2022-MPP/A.

**SEGUNDO:** Declarar **FUNDADA En Parte** la Pretensión subordinada a la primera pretensión principal de la demanda de la Entidad, declarando que la existencia o inexistencia de la resolución de alcaldía N° 481-2022-MPP/A no enerva la validez y efectos de la resolución de alcaldía 457-2022-MPP/A.

**TERCERO:** Declarar **FUNDADA la Segunda Pretensión Principal** de la demanda de la Entidad; por lo que el Tribunal Arbitral Unipersonal establece que el integro de los actos realizados por el representante común, Sr. Jorge Luis Cubas Sancho, se mantienen válidos y con efecto legal respecto a la Entidad, ello incluye el contenido y validez de las cartas N°085-2022 (5 de agosto) y la carta N° 90-2022 (12 de agosto).

**CUARTO:** Declarar **FUNDADA En Parte la Tercera Pretensión Principal** de la demanda; por lo que el Tribunal Arbitral Unipersonal reafirma la responsabilidad solidaria de todos los integrantes del consorcio Picota frente a la Municipalidad Provincial de Picota por los efectos patrimoniales consecuencia de la actuación individual o conjunta, durante la ejecución del contrato administrativo de ejecución de obra. Dejando a salvo el derecho de la referida Entidad para que recurra a las autoridades competentes a efectos de establecer otro tipo de responsabilidades.

**QUINTO:** Declarar **FUNDADA la Cuarta Pretensión Principal** de la demanda; por lo que el Tribunal Arbitral Unipersonal determina como monto pendiente de devolución la suma de S/13'860,568.22 (Trece Millones Ochocientos Sesenta Mil Quinientos Sesenta Y Ocho Y 22/100 Soles) a favor de la Entidad, dejando a salvo el derecho de la Entidad de recurrir al fuero común con la finalidad de discutir la generación y cobro de intereses.

**SEXTO:** Declarar **FUNDADA la Quinta Pretensión Principal** de la demanda de la Entidad; por lo que corresponde condenar al Consorcio Picota al pago de los Costos del arbitraje, según el detalle o liquidación desarrollado en los numerales 162 a 163 del presente laudo.

**DÉCIMO: DISPÓNGASE** la notificación y se publique el presente Laudo Arbitral

en el SEACE.

## **ÁRBITRO ÚNICO**